

# Prólogo

MAGDY MARTÍNEZ-SOLIMÁN Y JESSICA FAIETA\*

**E**n septiembre de 2015, tras la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se inauguró una nueva era para el marco de desarrollo internacional. La nueva agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que abordan las prioridades y los retos clave de los próximos 15 años: erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades y hacer frente al cambio climático.

Sin embargo, el verdadero desafío aún está por delante. La implementación de la Agenda 2030 será una tarea compleja, ya que no solo concierne a todos los ámbitos, niveles y representantes sociales, económicos y políticos, sino porque requiere también de enfoques capaces de integrar los diferentes ODS en los planes nacionales y locales. Su implementación deberá ser integral e incluyente, sin perder de vista el objetivo principal: alcanzar el mayor impacto posible con el menor costo.

Este nuevo marco para el desarrollo sostenible se dio como tarea ser una agenda “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Con el fin de contribuir a la definición de la Agenda post-2015, el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUM) facilitó un proceso de consultas globales sin precedentes. Se llevaron a cabo, entre otros, diálogos nacionales en cerca de 100 países y consultas virtuales que le permitieron a 8,5 millones de personas —incluyendo grupos vulnerables, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, sector privado, y los diferentes niveles de gobierno— compartir sus prioridades para la Agenda post-2015. Los mensajes clave de esta discusión global —recogidos en los informes “Un millón de voces” e “Implementación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015: oportunidades a nivel nacional y local”— fueron muy claros: las personas quieren estar involucradas en la definición e implementación de la nueva agenda, exigir la rendición de cuentas a los gobiernos y a las empresas privadas por sus compromisos, y fomentar sistemas de inclusión y alianzas estratégicas. Este compromiso con la nueva Agenda Global de Desarrollo se ratifica por parte de una ciudadanía activa que reclama insistentemente en diversos países y regiones mayor participación, acceso y transparencia. Será imprescindible tomar en cuenta estos elementos para garantizar la eficacia y el impacto de la implementación de los ODS y la Agenda 2030.

Además, debemos construir a partir de las lecciones que nos ha dejado la experiencia de los ODM. La implementación de la Agenda 2015 nos ha enseñado que, más allá del crecimiento, las

---

\* **Magdy Martínez-Solimán** es administrador adjunto y director del Bureau de Políticas y Apoyo a Programas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

**Jessica Faieta** es administradora adjunta y directora del Bureau Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

intervenciones de desarrollo deben abordar aspectos multidimensionales del bienestar. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe queda claro que no basta con más crecimiento económico para seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad. Si bien esa región ha sido muy exitosa en sacar a millones de la pobreza, hemos alcanzado un estadio que para seguir avanzando tenemos que explorar caminos innovadores que fortalezcan las capacidades de agencia de los actores del desarrollo. Las mismas políticas ya no nos van a rendir los mismos resultados de antes. Quedan por delante los retos más difíciles para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible: confrontar exclusiones, inseguridad, discriminaciones y desigualdades históricas que no se vinculan solo al ingreso. También se suman desafíos adicionales producidos por el cambio climático que afectan de manera particular a los pequeños estados insulares en desarrollo en nuestra región del Caribe (SIDS), a los sectores más vulnerables que sufren especialmente sus impactos negativos y a las externalidades de un modelo de desarrollo extractivista no incluyente que aumenta el riesgo de conflictos y desastres naturales en la región.

La nueva agenda —que asume compromisos universales que se deben concretar en función de los particulares retos regionales, nacionales y locales—, nos plantea el desafío de abordar la complejidad, heterogeneidad y desigualdad que nos presenta diversas conformaciones territoriales. En el mismo proceso de consultas, como parte de las discusiones lideradas por el GNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU-Habitat y el Grupo de Trabajo Global de gobiernos locales y regionales para post-2015 hacia Habitat III (GTF) promovieron diálogos locales, nacionales, regionales y mundiales sobre el proceso de localización del nuevo marco de desarrollo. Los resultados de estas consultas subrayaron el papel fundamental que desempeñan los gobiernos locales y regionales como promotores de desarrollo inclusivo dentro de sus territorios. Asimismo, señalaron la necesidad de asegurar la articulación entre nivel local, nacional y global a través de una cooperación descentralizada, como un requisito esencial para lograr la inclusión y la apropiación de la agenda. Así, en la región de América Latina y el Caribe, estos procesos fueron impulsados en Ecuador, El Salvador y Jamaica generando amplios procesos participativos a nivel local. Se ratificaron importantes consensos de particular relevancia para la implementación de la nueva agenda: que el desarrollo sostenible e inclusivo implica necesariamente descentralización y gobernabilidad multinivel, participación ciudadana, inclusión social y bienestar o “buen vivir”; que las capacidades institucionales y los recursos de los gobiernos locales deben fortalecerse para impulsar procesos de desarrollo territorial mediante procesos participativos; en el caso de los SIDS en el Caribe, la Agenda 2030 supone desafíos claves para construir resiliencia, como parte esencial de los esfuerzos para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. También es importante subrayar los desafíos de la gobernabilidad y sostenibilidad urbana. En el caso de ALC, la región en desarrollo más urbanizada del mundo —con más del 80% de su población viviendo en ciudades—, debemos plantearnos cómo lograr urbes más vivibles, más inclusivas, sostenibles y resilientes. Para ello es fundamental contar con instituciones responsables que aseguren mecanismos participativos y redistributivos

que contribuyan a mayor equidad y cohesión social y territorial asegurando cobertura y calidad de los servicios al conjunto de las zonas urbanas y rurales. Solo asumiendo la naturaleza multidimensional de la pobreza, la desigualdad y de las vulnerabilidades podremos promover acciones transformadoras.

Se ratifica así la pertinencia y relevancia del enfoque territorial dado que permite avanzar en el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones —social, económica y medioambiental— ya que identifica el territorio como punto de partida para todas las intervenciones, considerando su potencial endógeno, identidad, dinámicas y prioridades. El enfoque territorial se presenta entonces como una estrategia útil para facilitar y mejorar no solo el impacto a nivel local, sino también la coherencia con respecto a políticas nacionales de desarrollo, y al mismo tiempo la vinculación con el debate global. El principal desafío consistirá en dejar atrás la perspectiva “localista” e ir más allá para reconocer la complejidad del desarrollo, que conlleva un proceso de articulación de múltiples actores y de varios niveles. Por suerte, no partimos de cero ya que la experiencia acumulada de muchos países en América Latina y el Caribe en promover el enfoque territorial contribuirá a capitalizar los resultados e incorporar las lecciones aprendidas en la nueva Agenda 2030.

La perspectiva de enfoque territorial está íntegramente en línea con el Plan Estratégico del PNUD y asimismo, ha alimentado a la recientemente elaborada Estrategia Integrada de Gobernanza Local y Desarrollo Local del PNUD (GLDL). Además, contribuirá de manera sustancial a la estrategia del GNUD para la implementación de la nueva agenda, la cual, bajo el acrónimo TAPP (MAPS en inglés) —Transversalización (*Mainstreaming*), Aceleración (*Acceleration*), y apoyo a las Políticas Públicas (*Policy support*)— buscará ofrecer soluciones integradas para incorporar la agenda en las estrategias, programas y presupuestos nacionales y locales, prestando especial atención al compromiso de múltiples actores, los partenariados, la coherencia de políticas, la disponibilidad de datos y la rendición de cuentas.

Agradecemos a la *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* haber hecho posible esta publicación a fin de reflejar los puntos de vista de diversos actores e interlocutores —representantes de gobiernos locales y nacionales, organizaciones internacionales, academia— sobre la implementación de la Agenda 2030, sus retos y oportunidades desde la óptica del enfoque territorial. Estos socios tienen dos elementos en común: todos ellos tienen responsabilidades, en diferente grado, en la implementación de los ODS; y, deben coordinar sus actividades en torno a una estrategia común para lograr un mayor impacto. En este sentido, cabe señalar y subrayar el amplio consenso en torno al enfoque territorial como una estrategia capaz de impactar en la vida de las personas, puesto que cualquier política alejada de los territorios verá inevitablemente reducida o anulada su importancia.